

Tarragona, sucursal en Muntané, 5, urbanización San Salvador, a la que se asigna el número de identificación 43-12-78.

Reus, paseo Prim 35, sucursal a la que se asigna el número de identificación 43-12-79.

Alcover, sucursal en General Franco, 2, a la que se asigna el número de identificación 43-12-80.

Tarragona, sucursal en Cañellas, 10 y 12, a la que se asigna el número de identificación 43-12-81.

La Selva del Campo, sucursal en plaza Mártires, sin número, a la que se asigna el número de identificación 43-12-82.

Mora la Nueva, sucursal en Generalísimo, 92, a la que se asigna el número de identificación 43-12-83.

Alcanar, sucursal en Ramón y Cajal, 3, a la que se asigna el número de identificación 43-12-84.

Ascó, sucursal en José Antonio, 49, a la que se asigna el número de identificación 43-12-85.

Salou-Andorra, sucursal en avenida Andorra, sin número, a la que se asigna el número de identificación 43-12-86.

Madrid, 9 de mayo de 1978.—El Director general, Rafael Gimeno de la Peña.

## MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO

**15617** *ORDEN de 18 de abril de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo el día 28 de marzo de 1977.*

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de apelación promovido, ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, por el Procurador de los Tribunales don Francisco Martínez Arenas, en nombre y representación de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de fecha 26 de mayo de 1973, en la que, desestimando el recurso contencioso-administrativo, se confirmaban por ser conformes al ordenamiento jurídico los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid de fechas 14 de abril y 21 de junio de 1972, que fijaron en 319.362,48 pesetas el justiprecio de la finca número 278 del sector Poblado Social Mínimo de Orcasitas, expropiada a la Entidad mercantil «Vascocarranzana, S. A.», por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, en la que además se precisaba que el devengo de los intereses legales comenzaría el 7 de diciembre de 1958, continuando hasta el pago del principal; por el Alto Tribunal ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva literalmente dice así:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid contra sentencia de veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y tres, de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, que confirmó los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de Madrid de catorce de abril y veintuno de junio de mil novecientos setenta y dos, que justipreciaron en trescientas diecinueve mil trescientas sesenta y dos coma cuarenta y nueve pesetas, más intereses legales desde el siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, la finca doscientos setenta y ocho del sector Poblado Social Mínimo de Orcasitas, expropiada por dicha Comisión a «Vascocarranzana, Sociedad Anónima», debemos confirmar dicha sentencia y la confirmamos en todas sus partes; sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I.

Madrid, 18 de abril de 1978.—P. D., el Subsecretario de Infraestructura y Vivienda, P. J. López Jiménez.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid.

**15618** *ORDEN de 18 de abril de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por al Sala Quinta del Tribunal Supremo el día 23 de mayo de 1977.*

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de apelación promovido, ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, por el Procurador don Fernando García Martínez, en nombre y representación de don Eusebio Mesonero Sobredo, y por la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, sobre impugnación por la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de fecha 10 de diciembre de 1973, por la que, estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicho señor contra el acuerdo adoptado por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid de fecha 25 de enero de 1973, confirmatorio en parte de la resolución del ilustrísimo señor Delegado del Gobierno de 10 de octubre de 1972, en el expediente R-268/72, relativa a la liquidación de intereses del expediente de expropiación de la finca número 52, polígono 13, del Sector Vertedero Almacenes, de claraba como no ajustada a derecho la negativa plasmada en los referidos acuerdos de no satisfacer a los intereses de ocupación desde la fecha 30 de abril de 1958, en la que se produjo la privación, por ocupación del bien expropiado al recurrente, debiendo fijarse la liquidación correspondiente desde tal fecha al 1 de enero de 1969, esto es, por un periodo de diez años y ocho meses sobre el precio que fue fijado en 23 de mayo de 1958 como base (6.362,77 pesetas), por el Alto Tribunal ha sido dictada sentencia cuya parte dispositiva literalmente dice así:

«Fallamos: Que, desestimando los recursos de apelación interpuesto por la representación de don Eusebio Mesonero Sobredo y por la Abogacía del Estado contra sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de diez de diciembre de mil novecientos setenta y tres en el recurso quinientos sesenta y seis de mil novecientos setenta y tres, interpuesto por la representación de don Eusebio Mesonero Sobredo, sobre liquidación de intereses en expediente de expropiación de la finca cincuenta y dos del polígono trece del sector Vertedero Almacenes, en Madrid, confirmamos en un todo la referida sentencia sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 18 de abril de 1979.—P. D., el Subsecretario de Infraestructura y Vivienda, P. J. López Jiménez.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid.

**15619** *ORDEN de 18 de abril de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo el día 4 de noviembre de 1977.*

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de apelación seguido ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo ante la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, defendida y representada por el Abogado del Estado, como demandada-apelante, y doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Seebacher, representada por el Procurador don Samuel Martínez de Lecea Ruiz, como demandante-apelada, sobre impugnación de la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 29 de octubre de 1974, por la que, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha señora, se anulaban, por no estar ajustados a derecho, los acuerdos adoptados por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid y por el Delegado del Gobierno de la misma de fechas, respectivamente, 18 de julio y 27 de febrero de 1973, por los que se denegaba la petición de revisión del precio de expropiación de las fincas números 1 y 2 de las obras de repoblación forestal de la autopista de Barajas, segunda fase, y se decretaba que se procediese a evaluar de nuevo dichas fincas con arreglo a los criterios de valoración contenidos en la Ley de Expropiación Forzosa de 18 de diciembre de 1954, por el Alto Tribunal ha sido dictada sentencia cuya parte dispositiva, literalmente dice así:

«Fallamos: Que, desestimando en parte el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de veintinueve de octubre

de mil novecientos setenta y cuatro, la revocamos en cuanto determina que la retasación ha de efectuarse por los criterios señalados en la Ley de Expropiación Forzosa, quedando limitado su pronunciamiento, con anulación de las resoluciones combatidas, a la declaración que debe precederse a evaluar de nuevo las fincas que fueron expropiadas a doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno Seebacher, y justipreciadas por los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid de dieciocho de febrero y veintitrés de abril de mil novecientos sesenta y siete, sin más declaraciones; no haciendo expreso pronunciamiento en cuanto a las costas de ninguna de las dos instancias.

Así por nuestra sentencia, cuyo testimonio con los autos originales de primera instancia y expediente administrativo se devolverá a la Sala de procedencia y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, este Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 18 de abril de 1978.—P. D., el Subsecretario de Infraestructura y Vivienda, P. J. López Jiménez.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid.

**15620** *ORDEN de 18 de abril de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada por la Sala Quinta del Tribunal Supremo el día 16 de febrero de 1977.*

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de apelación interpuesto ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo por el Procurador de los Tribunales don Francisco Martínez Arenas, en nombre y representación de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, contra sentencia dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid el día 14 de mayo de 1975, en la que desestimando el recurso contencioso interpuesto contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación de dicha Provincia de 7 de noviembre de 1973 y 20 de febrero de 1974, por los que se fijaba el justiprecio de las fincas 76-77-78 del sector de la Plaza de Castilla, por estimarlas ajustadas a derecho se confirmaban las referidas resoluciones, por el Alto Tribunal ha sido dictada sentencia cuya parte dispositiva, literalmente dice así:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, contra sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de catorce de mayo de mil novecientos setenta y cinco, en el recurso ochocientos dieciséis/setenta y cuatro, sobre el justiprecio de las fincas setenta y seis, setenta y siete y setenta y ocho del sector de la Plaza de Castilla, confirmamos en todas su partes la referida sentencia, sin expresa imposición de costas.»

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, este Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 18 de abril de 1978.—P. D., el Subsecretario de Infraestructura y Vivienda, P. J. López Jiménez.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid.

**15621** *ORDEN de 20 de abril de 1978 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, número 51.491.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, en grado de apelación, seguido ante el Tribunal Supremo (Sala Quinta), con el número 51.491, interpuesto por don Adolfo López Palacio, contra la sentencia dictada en fecha 16 de febrero de 1976 por la Audiencia Territorial de Oviedo, en el recurso número 151/1975, promovido por el mismo recurrente, contra acuerdos

del Jurado de Expropiación Forzosa de Oviedo, de 20 diciembre de 1974 y 17 de febrero de 1975, sobre justiprecio de la finca número 388, expropiada con motivo de las obras de la CN-834, tramo de Pola de Siero a Oviedo, se ha dictado sentencia con fecha 30 de noviembre de 1977, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que, revocando parcialmente el recurso de apelación interpuesto en nombre del expropiado demandante, y confirmando en lo demás la sentencia apelada, sin expresa imposición de costas, en ninguna de ambas instancias, debemos anular y anulamos los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, de Oviedo, de veinte de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro y diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y cinco, declarando en su lugar:

A) Que el justiprecio de los mil ciento sesenta y ocho, cincuenta y dos metros cuadrados y el cierre de la finca es el de dos millones sesenta y cuatro mil novecientas diez pesetas, cantidad que debe incrementarse con el premio de afección.

B) Que se mantiene la indemnización de cincuenta y cinco mil pesetas por la urgente ocupación del terreno.

C) Que en concepto de indemnización de los perjuicios derivados de las limitaciones dominicales que sufre la parte de finca no expropiada se fija la cantidad de quinientas ochenta y tres mil trescientas treinta y tres pesetas.

D) Que todas esas cantidades devengarán el interés legal de demora a partir de los seis meses de la iniciación del expediente de justiprecio, cuya fecha se determinará en ejecución de sentencia.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1958, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 20 de abril de 1978.—P. D., el Subsecretario de Infraestructura y Vivienda, Pedro J. López Jiménez.

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras y Caminos Vecinales.

**15622** *ORDEN de 20 de abril de 1978, por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 305.031/76.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido ante el Tribunal Supremo (Sala Tercera), con el número 305.031/76, interpuesto por «Unión de Estibadores, S. A.», contra resoluciones de 21 de marzo de 1975 y 15 de julio de 1976, se ha dictado sentencia con fecha 16 de febrero de 1978, cuya parte dispositiva, literalmente dice:

«Fallamos: Que, se desestima el recurso interpuesto por la representación de la Entidad "Unión de Estibadores, S. A.", contra la resolución del Ministerio de Obras Públicas de 15 de julio de mil novecientos setenta y seis, desestimatoria de la reposición interpuesta contra la de veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y cinco que declaró la resolución, con pérdida de fianza, del contrato para la explotación de un tramo de doscientos cincuenta metros de longitud del muelle, en la margen izquierda del Canal de Deusto, concertado entre el citado Ministerio y la recurrente a que este recurso se refiere, cuyas resoluciones confirmamos; sin hacer especial condena de costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1958, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 20 de abril de 1978.—P. D., el Subsecretario de Infraestructura y Vivienda, Pedro J. López Jiménez.

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Señales Marítimas.

**15623** *ORDEN de 20 de abril de 1978 por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 304.983/76.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido ante el Tribunal Supremo (Sala Tercera), con el número 304.983/76, interpuesto por «Obemco, S. A.», contra resolución de 13 de abril de 1976, se ha dictado sentencia con fecha 22 de diciembre 1977, cuya parte dispositiva, literalmente dice: